

Del poder de las minorías a la construcción de las mayorías. Un nuevo desafío para recuperar el Estado

Mónica Zapatería

Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Resumen

El trabajo se propone indagar sobre la matriz fundacional del Estado argentino a lo largo de nuestra historia con las tensiones y antinomias que conlleva esta construcción. Fue producto de una serie de reflexiones abordadas en el seminario Estado y Procesos Sociales realizado en el marco de la Maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales de la Universidad Nacional de La Plata a fines del año 2015.

¿Bajo qué matriz fue concebido nuestro Estado? Fue el disparador que permitió recorrer distintos momentos históricos de su constitución partiendo de la generación del ochenta hasta la actualidad.

Esta revisión permitió llegar a algunas conclusiones sobre la situación actual de nuestro Estado y sobre el comportamiento de las diferentes clases sociales, sobre todo, de los sectores medios, que resultan determinantes en los procesos electorales.

Palabras clave: matriz; Estado; democracia; sociedad; procesos.

Escribir sobre Estado y sobre procesos sociales implica un desafío, más aún si se trata de una revisión que dé cuenta de nuestra historicidad en cuanto sociedad argentina. El reto se multiplica si uno tiene el propósito de comprender el momento actual por el que atraviesa nuestro país, en el que un gobierno de derecha asume el poder, esta vez, a través de comicios legítimos.

En el marco de la conformación de nuestro Estado, hemos pasado por las distintas formas de democracias —tras el “régimen oligárquico” de 1880-1916—, “ampliada” (1916-1930), “de masas” (1943/45-1955), “de inestabilidad político-institucional marcada por la alternancia democracia restringida y dictadura” (1976-1983), “posdictaduras” (1983-1989) y “excluyente” (en la década de los noventa) (Berrotarán y Pereyra, 2012: 146).

Realizar este recorrido permite comprender ciertas lógicas de los distintos sectores que conforman nuestra sociedad y dar respuestas a ciertos interrogantes que en diciembre del 2015 parecían no hallarse desde la visión de quien escribe estas líneas. Una vez más se comprueba que es necesario mirar hacia atrás para interpretar el presente y proyectar el futuro.

Orden y progreso

La generación del ochenta como momento instituyente es un punto de partida, el período comprendido entre 1880-1930, el “país granero”, se muestra al mundo, momento fundante de nuestra matriz ideológica, de origen oligárquico. Allí se gestan las primeras raíces de un desequilibrio regional que perdura hasta el presente. Intereses contrapuestos emergen en las luchas entre las élites del Puerto de Buenos Aires y el Interior, aparecen aquí los primeros síntomas que marcan tendencias de una clase dirigente, en la figura de Alberdi se erige un programa político basado en la consigna “Orden y progreso” que reúne a intelectuales y dirigentes de la época. El lema “Paz y administración” con el que Roca asume la presidencia en 1880 continúa en esa dirección y eleva a la máxima expresión la tensión entre Buenos Aires y el Interior como consecuencia de su propia impronta.

Se ponen en movimiento políticas vinculadas a la organización de la inmigración masiva, concentración demográfica y diversificación de estructura social en el marco de la conformación de sectores medios y obreros. Emerge el espíritu liberal materializado en la Constitución de 1853, que prioriza lo privado y relega en lo público las funciones básicas vinculadas con las relaciones exteriores, la educación, garantía de derechos individuales y la justicia.

Al tiempo que la clase dominante (primero, la militar y, luego, la de los ricos) protagonizaba el proceso de formación estatal, una incipiente burguesía hacía lo propio: grupos de comerciantes, laneros y saladeristas comenzaban a ejercer su influencia en el armado de la escena nacional a través de su poder económico. El Estado moldeaba la nueva estructura social argentina en tanto que se conformaba a sí mismo con acciones tendientes a dinamizar

circuitos de producción que alentaran la actividad económica, por ejemplo, por intermedio de la construcción de ferrocarriles y obras de infraestructura, momento también en el que se jerarquizó el valor de las tierras y la propiedad. Estimular la producción y los lazos neocoloniales con el exterior implicó arrebatar el territorio a los indígenas, explotar al inmigrante y facilitar los capitales para la producción. Promovió la formación de actividades docentes, legales, administrativas y religiosas, y la creación de un ejército que institucionalizó las Fuerzas Armadas. Se conformó una burguesía en diversos sectores de la actividad y se alentó la formación de organizaciones corporativas, tal fue el caso de la Sociedad Rural Argentina. Sin intenciones de extrapolar contextos históricos, vislumbro en esa matriz los primeros destellos sobre posibles explicaciones del momento actual.

Por fuera de la esfera estatal, pero en el marco de este contexto histórico, emergen partidos políticos modernos como la UCR y el Partido Socialista. En el primero de los casos, conformado por propietarios terratenientes no contemplados en la fórmula política dominante y, en el segundo, por críticos al modelo agroexportador, cuestionadores de la falta de impulso de políticas de consumo (Berrotarán y Pereyra, 2012: 151-152). Tras la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, los gobiernos radicales (a través de los cuales la clase media se empezaba a sentir representada) llegan al poder, y las características del Estado fundante se desplazan hacia un campo de actuación más amplio. Acontecimientos del ámbito internacional como la Primera Guerra Mundial y la Crisis de 1930 precipitan el agotamiento de este primer momento instituyente signado por el primer quiebre institucional.

Golpe e intervención

El Estado comienza a organizarse bajo el intervencionismo con los gobiernos militares de los generales Uriburu y Justo, producto de la convergencia integrada fundamentalmente por dirigentes políticos y representantes del poder económico. Por un lado, conservadores, radicales antipersonalistas, socialistas independientes y expertos y, por el otro, exponentes de la economía del país corporizados en sectores representativos de la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio y la Unión Industrial Argentina (Sidicaro, 2002: 27). Se protegía los intereses de grandes propietarios agrarios y había cercanía con los empresarios, no obstante, estas relaciones variaron en función de los intereses propios de cada sector. Durante la presidencia de Castillo, por ejemplo, aumenta la tensión entre el Estado y los grandes empresarios y la relación con la SRA se agudiza frente a su reclamo de achicamiento del

mismo, en tanto se extienden las reformas impositivas impulsadas por el gobierno para solucionar el déficit presupuestario. En los momentos previos al Golpe del 43, se vislumbra la necesidad de incluir en la agenda del Estado cuestiones sociales que atiendan la condición material y moral de la sociedad atravesada, en lo económico, por los beneficios y privilegios de determinados sectores —capitalistas, terratenientes y burócratas—, y en lo político, por el fraude. La necesidad de incluir a los “excluidos” también fue advertida por el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), entre los que se encontraba Juan Domingo Perón. Un golpe militar terminó con el gobierno de Castillo, y comenzó un período en el poder que estuvo en mano de los generales Rawson, Ramírez y Farrell. Son momentos de la historia argentina y mundial signados por la Década Infame y la Segunda Guerra Mundial (1939-1943). Esta transición va creando modificaciones en la estructura de un Estado liberal e intervencionista a partir del consenso que fue logrando Perón con las élites estatales, la burocracia y las Fuerzas Armadas. Ya desde la secretaría de Previsión y Trabajo, y en el marco del contexto del Consejo Nacional de Posguerra, se instala la lógica de Previsión que sienta las bases de un plan para la Nación sustentado en el “interés general” que lentamente irá gestando un proceso de masificación, es decir, la ampliación de derechos a sectores de la sociedad que hasta entonces no habían tenido la oportunidad de tenerlos.

Equidad

A partir del surgimiento del líder carismático, el orden del Estado se desplaza hacia la sociedad y se va creando una nueva matriz ideológica, que no era justamente el ideal del poder económico, pero que empieza a atender las urgencias planteadas por el conflicto social. Comienza a perfilarse un momento histórico de expansión de las actividades urbanas, industriales y de servicios que generan posibilidades a los sectores preexistentes y que lentamente irán conformando una sociedad de masas, lo que conlleva a una incipiente masificación, es decir, el acceso de los exponentes de las culturas populares a la vida urbana. Es en el marco de un escenario internacional de posguerra, creación del Estado de Bienestar y, por lo tanto, políticas tendientes a crear el pleno empleo y mayor consumo, cuando los asalariados más vulnerables acceden lentamente a bienes y servicios que antes les estaban vedados. Estos nuevos hábitos y prácticas sociales generaron en los sectores medios acomodados una reacción de diferenciación y rechazo que no se hizo esperar y que, una vez más, se manifestó en el ámbito de la cultura, lugar en el que las diferencias sociales son

negadas, pero no resueltas. Surgieron tensiones de clase a partir de este proceso, y las disputas ya no se focalizaron como antes entre radicales y conservadores.

Ya desde la Presidencia (1946), Perón, a través de la Secretaría Técnica, organiza un proceso de planificación que se traduce en acciones concretas destinadas a ejecutar planes vinculados a Obras Públicas, Salud, Educación, Industria, FF. AA. y Previsión Social, entre otras áreas. Surge un Estado en mutación con creación y ampliación de políticas públicas como nunca antes había sucedido en la génesis de nuestra estructura social, en él convergen planes y nuevos actores sociales.

La riqueza se reorganiza y el nivel económico de los habitantes del país se eleva, lo que provoca un consumo de características inexistentes hasta ese momento; se jerarquiza el rol del Estado, mientras que al sector privado se le asigna protagonismo bajo la lógica de la producción. En el escenario de posguerra, el peronismo impulsa su bandera de justicia social materializada en el fortalecimiento de la industria nacional, el mercado interno y el estímulo al consumo destinado a los nuevos sujetos de derechos socioeconómicos y de ciudadanía. Se constituye como fuerza política al mismo tiempo que ejerce el poder y representa esencialmente los intereses de actores sociales (las clases populares) antes de que estos se conviertan en sujetos de clase. El ingreso de estos sectores a la vida urbana rápidamente provocó respuestas en una sociedad hasta entonces acostumbrada al privilegio de unos pocos. Siguiendo los conceptos de Jesús Martín-Barbero al estudiar los movimientos sociales y populismos en América Latina, la clase alta ve en este proceso de masificación “el peligro” y no tarda en manifestar su distancia, en tanto la clase media vive este momento con “dolor” por no poder diferenciar de modo tan tajante sus hábitos de consumo (1987: 173). La integración de las clases populares a la sociedad y el consecuente acceso a bienes y servicios provoca al mismo tiempo su transformación.

La génesis de amores y odios hacia las figuras carismáticas de Eva y Perón, conductores del sentir popular y representantes de sus intereses en los años cuarenta, se reeditó en los últimos doce años del gobierno nacional y popular que tuvo este país, antes del ingreso de la derecha a las esferas del gobierno en diciembre del 2015. La carga simbólica y el cuidado que los sectores populares asignan a sus líderes se replican más allá de las décadas y de los contextos históricos, al menos así ha quedado demostrado en los últimos tiempos, aún frente al desatino histórico que la voluntad del pueblo reflejó en los comicios pasados. Históricamente los ricos conservan su riqueza y los pobres, su pobreza; y allí, en el medio, una clase siempre en transición que creyó “pertenecer a un primer mundo en los noventa” y que ahora espera una “lluvia de inversiones” que la eleve a ese destino utópico. El paralelismo histórico, expresado

en este párrafo, va configurando ciertos comportamientos sociales que se irán repitiendo a lo largo de las décadas, en el marco de una historia cíclica, pero que nunca será igual.

Consumo

Revisar la historia en paralelo ayuda a comprender ciertas lógicas que se manifiestan a lo largo de las décadas. Las reacciones de ciertos sectores de la clase media y alta de la década de los cuarenta —frente a acciones del Estado tales como la generación de empleo y la firma de convenios colectivos de trabajo— se corresponden con las conductas de sectores sociales actuales. Estas políticas públicas significaron que los más desprotegidos accedieran a bienes y servicios, tuvieran vacaciones pagas, jornada laboral de 8 horas, aguinaldo e incentivo al consumo. El temor de ese universo social heterogéneo de entonces se replica también en estos últimos doce años del gobierno nacional y popular frente a la amenaza de identidad que significa —hoy igual que ayer— que los sectores más vulnerables accedan a bienes y servicios como nunca antes. Hay que indagar en la ansiedad de los integrantes de esas clases por diferenciarse de los actos de consumo de esos “intrusos” que ponían en riesgo privilegios y distinciones para dar respuesta a un accionar colectivo que se repite. En ese sentido, Natalia Milanesio (2013) describe claramente en su texto *Cuando los trabajadores salieron de compras* la atmósfera de entonces a través de la metáfora del cuento “Casa tomada” de Julio Cortázar (1951). Símbolo de la desorientación de las clases privilegiadas frente al avance de esa marea humana conformada tanto por inmigrantes como por obreros significaba también la disputa por el monopolio del espacio urbano, sobre todo los fines de semana y en la zona céntrica de la ciudad donde estaban localizados los teatros, cines, tiendas, bares y cafeterías. Si para el Gobierno y los nuevos actores esta prosperidad económica se traducía en logros, los antiperonistas la leían en términos de cortoplacismo y superficialidad. Otra vez, las reacciones se replican en voceros del gobierno actual al señalar que los asalariados vivieron una “ficción” al acceder durante los últimos años a bienes, generar consumo y hasta viajar al exterior. “Lujos” a corto plazo que caen por el propio peso de la realidad, hay que “sincerar”, vuelve el “pobre a su pobreza”, vuelve “el rico a su riqueza”, cuando la fiesta termina... dicho esto —claro está— desde la visión de quienes “conservan” el orden y subordinan la política al mercado, aunque se sirvan de las herramientas del Estado que intervienen para vaciarlo de contenido.

El resentimiento de clases se expresa una y otra vez, tanto a mediados del siglo XX como en las primeras décadas del XXI, la historia se repite, pero nunca es igual, intereses en pugna, en contextos diferentes, pero con lógicas afines. El peronismo, con las banderas de justicia social, provoca reacciones de amores y odios, en el devenir histórico, dicotomía de un sentimiento no resuelto en el seno de la sociedad y al parecer sin miras de salvar la grieta... La pérdida de exclusividad que genera la inclusión social irrita y exagera el odio por la “mezcla forzada” con los sectores de menores recursos que vienen a contaminar los espacios urbanos que antes eran homogéneos, el turismo en la ciudad de Mar del Plata es un claro ejemplo de todo lo expresado. Bastión territorial del turismo de élite, “la ciudad feliz”, en los años cincuenta muta su paisaje urbano provocando, hasta en estos días, esa mezcla de clases sociales en sus calles, al margen de la migración de los sectores más adinerados hacia otros horizontes. Se altera el orden social en el que las clases se mezclaban solo para servir y ser servidas, desde mediados de siglo se subvierte la división del consumo según la pertenencia, y la atmósfera urbana se contamina ante la pérdida de privilegios que ocasiona el comercio masivo. De qué modo diferenciarse de los “intrusos” fue la pregunta latente en gran parte de los sectores medios cuyos hábitos ya no distaban como lo hubieran deseado de los gustos de esos “advenedizos”; qué otros espacios ocupar para aislarse de tamaña invasión es el interrogante de las clases altas, inmersas en su repliegue, cuidando una exclusividad en la apropiación de espacios que ya no es tal.

El modo de vestir también otorgaba identidad, por un lado, los “descamisados”, símbolo de vulgaridad, y, por el otro, los señores de sombrero, saco y corbata representantes de la distinguida “oligarquía”. Una vez más el problema son los del medio, esos que desprecian las “camisas desabrochadas y arremangadas” y que transitan con “dolor” esos escasos metros que los distancia de quienes “desprecian”. El obrero bien vestido también se convierte en una amenaza y se culpa al peronismo de tamaño ascenso social de los sectores más desposeídos (Milanesio, 2014: 143).

En esta intención de ver el modo en que las clases sociales construyeron su identidad a lo largo de las décadas se puede observar la aceptación por parte de la “gente de bien”, el ingreso a cierto estrato social de aquellos “hijos de inmigrantes” europeos, quienes, exitosos, fueron conformando “la burguesía enriquecida” y buscaron la aceptación —y en muchos casos la consiguieron— de las élites, porque para estas ya no eran un rival del abolengo. Distinto fue el sentir de las clases medias, ese grupo heterogéneo de personas con distintos ingresos, que incluye a comerciantes, industriales, estudiantes, empleados y profesionales. Hacia los años cincuenta, esos sectores llevaban una o dos generaciones perteneciendo a dicha clase,

procedentes de ese proceso social que, para la mayoría o para sus padres, se había empezado a constituir tras la llegada de Europa a fines del siglo XIX. Para un número ascendente de maestros, empleados estatales, administrativos y graduados universitarios la entrada a la clase media es más reciente y es posibilitada por los procesos de modernización de la vida urbana de los años treinta. Este “universo heterogéneo” provoca que no exista entre sus filas normas de pertenencia y tradiciones sociales sólidas que les dé una organización institucional. La inflación de entonces —como la de hoy— afectó a los sectores medios, sobre todo a pequeños comerciantes por los controles de precios dispuestos por el gobierno; profesionales y empleados estatales padecieron la reducción de sus salarios por el aumento de precios, solo el estándar de vida de los obreros fue protegido por los convenios colectivos de trabajo. El proceso de modernización en la vida urbana dio visibilidad a la masa de trabajadores, muchos de ellos también procedentes del Interior, en busca de una mejor calidad de vida en las zonas más productivas del país. En este contexto se ponen en juego no solo las prácticas de consumo, sino también las relaciones de género entre hombres y mujeres de mediados de siglo XX.

Desarrollo o dependencia

El Golpe del 55 que derroca a Perón inicia un nuevo período (1955-1976) de inestabilidad política e institucional marcada por la alternancia de democracia restringida y dictaduras (Berrotarán y Pereyra, 2012: 146). Se inicia un momento histórico signado por un Estado que fluye entre el autoritarismo y la burocracia, pero que se encuentra, además, a expensas de la importación del modelo norteamericano centrado en políticas de desarrollo tendientes a gestar cambios sociales que conviertan a estas sociedades latinoamericanas en “modernas”. En ese sentido, el gobierno constitucional de Arturo Frondizi (Movimiento de Integración y Desarrollo) da cuenta de ese momento histórico, en el que, en verdad, dichas estrategias de desarrollo, se vinculaban más a la expansión del poder hegemónico de Estados Unidos hacia estas tierras tras “el peligro” de la Revolución cubana de 1959. Las políticas de asistencia, ayuda e incentivo al desarrollo fracasaron en estas zonas, y nuestro país no fue la excepción: las dictaduras de los años setenta y sus respectivos endeudamientos, entre otros daños colaterales, dan cuenta de ese resultado que provocó profundas crisis sociales y económicas, de las que aún quedan registros en nuestra sociedad. Esa conjunción de quiebre del orden institucional e imposición

de modelos económicos —de décadas anteriores— signaron, con prácticas residuales, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989).

El Estado en retirada

Vivir en democracia, luego de años de dictadura, de terrorismo de Estado, y con las secuelas que dejó ese accionar en las relaciones sociales en todas sus dimensiones, fue una etapa difícil de transitar. En lo económico, las políticas de endeudamiento de una democracia amenazada por quiebres institucionales se tradujeron en los ochenta en la pérdida del poder adquisitivo, en pauperización e hiperinflación.

Ya desde 1976 se inicia la desindustrialización, y el coletazo que esto conlleva perjudica primero a la clase obrera y luego incide en el achicamiento del sector público, que replica en la clase media. La sociedad argentina atraviesa un proceso de empobrecimiento del cual muy pocos salen ilesos, Alfonsín implementa el Plan Alimentario Nacional que anticipa la lucha contra la pobreza de los noventa, pero que, al mismo tiempo, articula con la esencia asistencialista del desarrollismo de los años sesenta y setenta. Se inicia un proceso que encontró su punto cumbre en la década del menemismo, caracterizada por la ola de privatizaciones que destruyeron en gran parte la acción colectiva organizada por las conquistas sociales y los derechos adquiridos que el movimiento peronista había construido durante su gobierno. Digo a medias, porque la construcción de la acción colectiva que la matriz peronista creó durante el período 1946-1955 se inscribe en integrantes de sectores sociales más allá de la ausencia en el ejercicio del poder, como ocurre en los segmentos históricos de estos años 1955-1973 y 1976-1989.

Resulta interesante revisar los comportamientos de la conjunción de los sectores más humildes a partir de manifestaciones sociales bajo sus diferentes formas: asentamientos, piquetes, estallidos y saqueos durante las décadas de los ochenta y de los noventa. Sin dudas, las razones por las que se generan estas acciones tienen en su origen motivos diferentes, porque los contextos políticos son otros, la mera enunciación es solo a fin de comprender que históricamente la sociedad reacciona cuando las acciones del Estado no se corresponden con sus intereses. Un trabajo aparte merece el análisis del rol que juegan los medios de comunicación masivos en esta escena, y varios capítulos más demanda interpretar el protagonismo actual de las redes sociales en la producción de sentidos que se pone en juego en estas instancias. Una vez más, resulta inevitable poner en paralelo los procesos y reconocer

comportamientos similares en la relación que se teje entre Estado y sociedad al conformar la matriz que articula su existencia.

Se desarrolla durante los noventa el gobierno de Menem, quien llega al poder, entre otras razones, desde el relato de la “revolución productiva”, pero que en la práctica ejerce una estrecha alianza con sectores liberales-conservadores que deriva en un drástico descenso de ciertos sectores sociales vulnerables a estos cambios. Esto conlleva a ciertos debates académicos sobre el modo de medir la pobreza de esos años, por un lado, “los pobres estructurales” (siempre fueron pobres) y, por el otro, “los nuevos pobres” (sectores medios pauperizados). Paralelamente a este proceso se forma un nuevo sector de clases medias, conformado por comerciantes, empleados y profesionales que salen beneficiados de las reformas y se identifican con un nuevo modo de ser ciudadano construido alrededor de las prácticas del consumo; es la época del “uno a uno” (basado en la ficticia paridad del valor dólar/peso) y del famoso “deme dos” de la idiosincrasia de los nuevos consumidores. Esta época se corresponde con la ola privatizadora que el capitalismo salvaje extendió por estas tierras, exacerbando la individualidad, la falta de solidaridad entre “ganadores” y “perdedores” y dando comienzo al período de “democracia excluyente” (Berrotarán y Pereyra, 2012: 160).

Se inicia la era de los retiros voluntarios, la indemnización en lugar de la inserción laboral, se rompe el contrato social y se potencia la desigualdad. El Estado Providencia, gestado en 1945, ya no es un modelo a futuro, sino todo lo contrario; atrás quedan las premisas de solidaridad, y los principios de los derechos sociales no se corresponden con la lógica de la exclusión imperante en la última década del siglo xx. Estamos frente a un Estado que, en lugar de pagar a los trabajadores, indemniza a desempleados, expulsa en lugar de insertar en la sociedad. Quienes quedan al margen del sistema ya ni siquiera pertenecen a una clase, no tienen voceros ni delegados. Una vez más, la historia es cíclica, pero no se repite, las élites que tuvieron un rol protagónico en los noventa se reflejan en los destellos de la generación del ochenta. El Estado interviene para retirarse bajo las lógicas promercado, a través de la descentralización de los servicios, a la espera del “derrame” de inversiones que redunden en beneficios para la sociedad; una vez más, se trazan paralelismos en nuestro devenir histórico. Se reedita el proceso actual en la lógica de los noventa, en su matriz fundante basada en aquel primer momento instituyente de la creación de nuestro Estado. Sin dudas, el gobierno de Menem rompió con la tradición peronista y aplicó el programa neoliberal, los actores socioeconómicos predominantes —de entonces— fueron desplazados en beneficio de los inversionistas extranjeros y, obviamente, la privatización dejó al Estado con menos herramientas para responder a las demandas sociales.

Hubo un retroceso de las conquistas sociales y de los derechos adquiridos que se puso de manifiesto en la apertura de la economía, la desocupación, la pérdida del poder adquisitivo, el debilitamiento de los sindicatos, el endeudamiento, la flexibilización laboral y las privatizaciones; procesos que remiten al presente, en el que ya solo falta que se repitan las dos últimas situaciones, tal vez, en un futuro cercano.

El paralelismo se torna inevitable si se repasa esa década en la que “el hombre común” vivía el alivio de la inflación, el retorno al crédito para el consumo —de hecho, el triunfo de la segunda presidencia de Menem se la recuerda por el “voto cuota”— y la estabilidad de los ahorros. Pero esa abstracción de la realidad no permitió ver el riesgo que implicaba el ceder potestades a actores externos que regulaban el valor de la moneda y la estabilidad de su economía. El “voto de los mercados” (Ricardo Sidicaro, 2002) por sobre las necesidades de la gente ubicó a la dirigencia de entonces en una situación de caos que le restó legitimidad política ante el reconocimiento explícito de poderes ajenos a la organización del Estado nacional. Tarde o temprano, negar la realidad —se decía por entonces que pertenecíamos al primer mundo— tiene sus consecuencias.

Del primer mundo a los ancestros tercermundistas

Sobre la base de una sociedad herida por la desilusión de no pertenecer finalmente a ese primer mundo, emerge el gobierno de la Alianza (1999) con la presidencia del radical Fernando De la Rúa. El centenario partido, desde su matriz fundacional, se define a sí mismo como defensor de la ciudadanía política y sostiene su programa sobre la base de la Constitución Nacional, más allá de las distintas variaciones de los momentos históricos en los que llega al poder. El radicalismo funda su proyecto en la defensa de la ciudadanía y la democracia, y aspira históricamente a vincular su proyecto con los intereses de las clases medias (Sidicaro, 2002: 55-56) Por su parte, la dirigencia del FREPASO se gana al electorado desde un relato basado en la “escucha” de la gente y desde una matriz que se sustenta en el entendimiento de la política y de la sociedad (2002: 55-56). Se ubican en la vereda contraria al neoliberalismo y anclan sus propuestas en la lucha contra la corrupción, gestando una empatía con el “hombre” y la “mujer” común, sobre todo, de clase media. El gobierno de la Alianza llevó a una nueva crisis y a la descomposición del Estado, al continuar contradictoriamente sus matrices con el modelo neoliberal. La Reforma Laboral a pedido del FMI, como tantas otras políticas para apoyar el sistema financiero, provocó la renuncia del vicepresidente e implosionó esta coalición

hacia el interior de su dirigencia. Se aceleró el proceso de endeudamiento externo, se desorganizó la Administración Pública, se quebró la convertibilidad y ya no fue posible obtener préstamos en los mercados financieros. Fin de la ilusión, otra vez.

La reacción —en gran parte— de quienes les habían posibilitado la llegada al poder, esencialmente, no se hace esperar: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” fue el grito de entonces que ganaba las calles y se reflejaba en las crónicas periodísticas. El Estado que debía ser garante es el que incumple los contratos, recorta el gasto público, anticipa jubilaciones, no paga a proveedores y viola los derechos establecidos.

La clase media, afectada en sus intereses, gana la vía pública ante ciertas medidas como “el corralito”, a través de la cual los ahorristas no podían retirar de los cajeros automáticos más de \$ 250 por semana (1). Se generan los famosos “cacerolazos del 2001” que, a diferencia de las manifestaciones sociales mencionadas en los párrafos anteriores, son movimientos de reacción espasmódicos ante acciones adversas, pero que no se sostienen ni en el tiempo ni el territorio. Aquí no se trata de una reacción para pedir trabajo y comida, aquí se trata de pedir por el “excedente”, por el retorno del dinero no gastado. Sin ánimo de restar validez a estas protestas, porque, indudablemente, el ahorro es el resultado del esfuerzo, es necesario destacar la diferencia del móvil de las reacciones populares y, además, ponerlas en sus contextos históricos pertinentes. La realidad de las clases populares es diferente, las coloca en situación de dependencia frente al Estado, por eso se convierten en actores sociales y generan acciones que perduran en el tiempo y en el territorio basadas en la satisfacción de sus necesidades básicas. En este proceso se conjugan la base territorial, las luchas por los derechos y el ideal de un proyecto que ya parece extinguido por la prepotencia de los hechos. Su existencia depende del vínculo con el Estado y a través de sus políticas intentan sobrevivir. Sin dudas, los móviles de acción son diversos, para unos se trata de subsistir y para otros, de preservar sus intereses, pero la sociedad en sus distintos formatos se expresa tarde o temprano. “La acción individual o colectiva es al mismo tiempo tanto estratégica como ideológica o expresiva. Es posible al mismo tiempo participar en una red clientelista y reclamar por los derechos o protestar contra la corrupción” (Mercklen, 2015) (2).

La vuelta del Estado

Los sectores vulnerables de la sociedad son afectados frente al fracaso de la Alianza, y la clase media, dolido por la desilusión y la confiscación de sus ahorros, no tuvo otra opción que ganar

“visibilidad” en las calles como históricamente, bajo otras consignas, lo hicieron aquellos a quienes consideran “clientelistas” o “subsidiados”. Párrafos aparte merecen los “presidentes de apenas días” en el período previo a la asunción de Eduardo Duhalde, pero no es el propósito que quieren reflejar estas líneas. La llegada de este hombre, procedente de las filas del peronismo, al poder no replicó en el regreso de las conquistas sociales, más bien, se continuó con la lógica de favorecer al poder económico y mediático, pero, ante tanto caos previo, su gobierno se caracterizó por ser esa transición que le facilitó a Néstor Kirchner llegar a la presidencia en el 2003 y construir de un modo inesperado las bases de poder a partir del 22 % de los votos, tras aquel balotaje que amenazaba con la vuelta de Menem al gobierno.

Bajo los gobiernos de Néstor y Cristina se genera la matriz de este nuevo momento histórico que sella un antes y un después en la vida de los argentinos. Regresó la política al Estado, el país se desendeudó, las clases populares se reinsertaron a la sociedad, las clases medias volvieron a las lógicas del consumo, las clases alta siguieron ganando dinero, los sindicatos volvieron a las paritarias, los derechos humanos retomaron su lucha por la justicia, la estatización de Aerolíneas Argentinas y de YPF se tradujeron en un mejor servicio para la ciudadanía, las jubilaciones volvieron a la órbita del Estado, la Ley de Medios mostró —entre otras cosas— las caras del poder mediático; en definitiva, en la “década ganada” se retomaron las conquistas sociales.

Los “K” reeditan el relato de las bases peronistas adaptadas a las lógicas del siglo XXI y, como era de esperar, actualizan las tensiones entre las clases sociales como en el peronismo fundacional. El desprecio hacia quienes se benefician por las nuevas políticas públicas reactiva la descalificación histórica de sus potencialidades, se los describe como “vagos” que “viven del dinero que el Estado recauda de los impuestos”. Se tergiversa la intención de acciones concretas como la Asignación Universal por Hijo, se enjuicia, bajo la lógica del asistencialismo, a los programas de inserción a la vida digna de los más vulnerables. La inclusión a la sociedad de los que menos tienen abre nuevamente a la clase media la sospecha del “peligro”, genera —igual que en los años cuarenta— la necesidad de separarse, de poner distancia, de diferenciarse de ese “otro social”.

Una vez más, emergen los paralelismos históricos. ¿Cómo un basurero va a estar a nuestra altura?, se pregunta Natalia Milanesio en su libro *Cuando los trabajadores salieron de compras* al dar cuenta de los nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Hoy, igual que ayer, cierto sector de la clase media y alta reacciona con la misma ansiedad frente al trabajador consumidor.

Los tiempos son otros, pero las lógicas de razonamiento parecieran ser las mismas y los relatos se repiten a lo largo de las distintas generaciones. Durante los últimos doce años se trabaja sobre la base de la reconstrucción del tejido social, a través de una matriz de Estado garante de políticas inclusivas. El gobierno de Cristina no estuvo ajeno a las protestas, también fue receptor de las acciones colectivas que tuvieron como ejes, en diferentes momentos de su mandato, “las retenciones” a las patronales rurales y el “impuesto a las ganancias”. Es necesario tener una mirada consciente y crítica de la realidad social y una apertura mental que no replica en la mayoría de las clases medias urbanas para comprender que los móviles de las protestas contra Cristina anclaron sobre bases impositivas, no sobre conquistas sociales, es que en ese escenario histórico nada había que reclamar sobre los derechos adquiridos porque no solo fueron respetados, sino que, además, fueron potenciados con las herramientas de un Estado desendeudado y que dejó atrás las fallidas recetas del FMI combatidas también desde el discurso en distintos foros internacionales.

La vuelta del mercado

La construcción del poder y doce años de estabilidad y bienestar social, años de consumo y de adquisición de bienes impensados en otras épocas, así como el incentivo al turismo y la posibilidad de viajes al exterior como nunca antes había existido no fueron suficientes para continuar con el modelo.

Una vez más, integrantes de las clases media y alta ponen el acento en las formas y en “los modos” de la exmandataria, asusta ver tanta militancia “estigmatizada”, el peligro de “los pobres”, y ahora de “los jóvenes adoctrinados”; son una amenaza a los privilegios...

El discurso de la “corrupción” orquestado desde el poder mediático como si sus dueños no conocieran sus prácticas de antaño y sus vínculos con el poder político... Corrupción, como si no fuera uno de los males estructurales de la matriz del Estado que trasciende gobiernos...

Se suma a estas variables una determinada impronta en la construcción del poder desde la acción, pero también desde el relato, un poder de la oralidad y de la confrontación con sectores del poder que nadie se atrevió a enfrentar, con excepción del memorable discurso de Ricardo Alfonsín frente a la patronal del campo en la Sociedad Rural Argentina. Redoblar la apuesta a las presiones y confrontar con un abanico diverso de sectores no podía más que sumar adversidad desde las clases altas y el desprecio de sectores de la clase media por las razones de antaño ya explicadas.

La ausencia de referentes válidos para continuar el modelo desde el seno mismo de esta matriz también fue un factor preponderante, la aceptación de Daniel Scioli fue alta, pero no lo suficiente para garantizar la continuidad. Las figuras de Néstor y Cristina tuvieron un peso tal que no fue posible su descendencia en los cuadros políticos actuales; tal vez, porque no haya dirigentes de esa magnitud entre sus filas o, tal vez, porque todavía no alcanzan a vislumbrarse. Todas estas variables favorecieron la llegada de Cambiemos al gobierno.

Con resultados que ni ellos mismos esperaban, una nueva alianza llega al poder con el relato del cambio y una fórmula basada en un discurso redentor que supo convencer a los disconformes con el estilo “K”. Cambiemos llegó al poder para cambiar, pero las mutaciones no fueron para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía o, al menos, a gran parte de esta. Se retoma la prédica del mercado por sobre el Estado como en los años noventa. En ese sentido, aumentó un 5 % el número de personas en situación de pobreza por ingresos en el primer trimestre del año, así lo consigna un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (3).

De nuevo, vuelve “el pobre a su pobreza”, el rico “a su riqueza” y las clases medias siempre en transición ahora transitan por las calles, y los nuevos modos de acción social se denominan “ruidazo” para que se escuche bien fuerte la disconformidad frente a la subas de tarifas. Son acciones convocadas por la ciudadanía que ve cómo día a día se desmorona su poder adquisitivo y se convocan mayoritariamente a través de las redes sociales. Aquí no hay líderes, ni dirigentes, ni sindicalistas, se trata de un ejército ciudadano sin líder y, tal vez, allí reside su poder. No perduran en el territorio ni articulan políticas sociales con el Estado, pero sus acciones están latentes si sus intereses son amenazados, justamente, por el poder al que le permitieron llegar —en gran parte— con sus votos.

Paradojas, contradicciones, de un sector de la población que no responde a una conciencia política y social, su voto varía según sus propias lógicas, aunque sean equivocadas. Por su parte, las clases populares salen una y otra vez al cruce del poder hegemónico sin medir más costos que el de satisfacer sus necesidades casi siempre insatisfechas, más aún en los últimos tiempos. Salen a las calles, ganan el territorio y libran, una vez más, la batalla contra las consecuencias que el modelo neoliberal dispara sobre su presente y futuro, se repiten las escenas, aunque los actores sociales sean otros, pero quedan en la memoria de su acción colectiva los derechos que alguna vez supieron ganar generaciones anteriores al articular sus intereses y aspiraciones con la organización del Estado peronista de los primeros períodos.

“Democracia excluyente” son las palabras que, desde mi perspectiva, transitan por estos días el sentir de muchos. Por ahora queda en pie la democracia como forma de organización

política, aunque, últimamente, rebroten giros o guiños presidenciales a una etapa de la historia que parecía cerrada, pero no resuelta. Solo ese aspecto de los gobiernos conservadores y de derecha faltaba identificar en estos tiempos. Ya se regresó al mandato de los mercados, a la represión en las calles, a la exclusión del “otro social”, solo faltaba poner en cuestión la crisis social vivada en los años setenta, a través de un relato que reduce aquel triste y drástico conflicto social en una “guerra sucia” o se minimiza la cantidad de desaparecidos como si la cantidad disminuyera la gravedad de los hechos de entonces. Tiempos difíciles de transitar y de sobrellevar y también, porque no, para sobrevivir. El “sálvese quien pueda” resurge sobre las bases de un Estado nuevamente en descomposición y que responde al mandato del mercado financiero internacional, el que alguna vez nuestra dirigencia supo enfrentar.

Reflexiones finales

Nuestra sociedad ya conoce los resultados de esta experiencia, recetas que no curaron nuestros males residuales. Cuáles son los móviles de un accionar de una clase media urbana que no determina los resultados electorales, pero orienta la balanza hacia un lado o hacia otro según sean los contextos sociales en los que se producen los comicios. ¿Llegará el momento en el que alguna vez comprenda la clase media que, si se asocia con la clase popular, tal vez, los resultados sean mejores? La fusión con la clase alta no le convino o, al menos, no le resultó en términos de “lo deseado”. ¿Perderá la clase media alguna vez el miedo a ese “otro social” que es distinto, pero no está tan distante de sus propios anhelos? Cuando los intereses y las acciones de la mayoría de la ciudadanía se pongan en común, tal vez, redunden en el beneficio de la sociedad toda, porque, por carácter transitivo, la clase alta siempre se beneficia. Solo desde la lógica del legado del “empoderamiento”, al que acudió Cristina al dejar el poder, se podrá optimizar el devenir histórico para que la patria “sea el otro” y no “del otro”, del que está más arriba en la esfera social, o “del otro” que ejerce el poder desde un escenario que no es el nacional, sino que lo trasciende. Si nuestro futuro se teje esperando la “lluvia de capitales extranjeros”, entraremos, francamente, ante un nuevo período de sequía y quiebre social.

Los procesos sociales que se vivieron durante los años 2003-2015 se pueden consignar bajo la denominación “democracia incluyente”. Resta saber sobre qué modo de democracia tendremos que hablar para describir el período actual de un gobierno que ganó por mayoría de votos, pero gobierna para una minoría, tal vez, ese sea un nombre posible “democracia de las minorías”. La clase media, nuevamente, tendrá un rol importante que cumplir en los próximos comicios

para revertir esta situación y fundar una nueva etapa, en la que la democracia sea para las mayorías; por su parte, los sectores populares portarán en su memoria y en su acción colectiva los derechos que alguna vez supieron conseguir; y la clase alta, esté quien esté en la conducción del Estado, siempre conservará sus privilegios.

Habrá que trabajar, entonces, en la construcción de esas nuevas mayorías, caminar el territorio mismo, recuperar el relato en las redes sociales y en las aulas. Habrá que revisar los errores, potenciar los aciertos y apostar a la mirada crítica de los jóvenes para que en los próximos comicios esta situación se revierta y así escribir en la historia un nuevo modo de democracia, en pos del bien común y de los principios republicanos.

Notas

(1) Las crónicas del momento describen la situación de crisis de la Argentina del 2001. Por ejemplo en <http://www.clarin.com/mundo/crisis-Argentina_0_884311669.html>.

(2) No se consigna en la versión impresa del libro *Pobres ciudadanos*, de Denis Merklen, la numeración de páginas, razón por la cual no figura en la cita del interior del texto.

(3) Disponible en <www.uca.edu.ar>.

Bibliografía

- Berrotarán, P. (2003), *Del plan a la planificación. El estado durante la época peronista*, Buenos Aires: Editorial Imago Mundi.
- Berrotarán, P. y E. Pereyra (2012), "Momentos y procesos para una historia del Estado en Argentina, *Revista Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental*, año 18, n.º 30, Buenos Aires, pp.141-167.
- Merklen, D. (2005), *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática*, Buenos Aires: Editorial Gorla.
- Martín-Barbero, J. (1987), *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, Barcelona: Editorial Gili.
- Milanesio, N. (2014), *Cuando los trabajadores salieron a comprar. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo*, Buenos Aires: Editorial Siglo XXI.

Vol. 1, N.º 52 (octubre-diciembre 2016)

- Sidicaro, R. (2002), *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55 / 1973-76 / 1989-99*, Buenos Aires: Editorial Siglo XXI.
- Sidicaro, R. (2003), *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*, Buenos Aires: Editorial Eudeba.
- Oszlak, O. (1985), *La formación del estado argentino*, Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- Vommaro, G. (2011), “La pobreza en transición. El redescubrimiento de la pobreza y el tratamiento estatal de los sectores populares en Argentina en los años ochenta”, *Revista Apuntes de Investigación del CECYP*, n.º 19, pp. 45-73.